

---

*El PRI se Abre a la Inversión Privada*

## **Auténtica Elite del Poder**

- ★ Recibir 25 Millones de Dólares, Gran Compromiso
- ★ Es Difícil Creer que la IP Actúe Sólo por Simpatía
- ★ Frente a Ellos, la Democracia no Tiene Oportunidad

LORENZO MEYER

La noticia apareció el viernes pasado en un periódico especializado en economía, era escueta pero importante: el PRI —una de la últimas grandes paraestatales— se dispone a abrirse a la inversión privada. Como resultado de tan trascendente decisión, México va a contar, ya, con una auténtica élite del poder.

La noticia aparecida el viernes es esta: el 23 de febrero, en casa del ex secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, y en presencia del Presidente de la República, el líder formal del PRI, Genaro Borrego, pidió a 25 de los más importantes capitalistas mexicanos ahí reunidos —casi todos miembros del exclusivo Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN)— una contribución para las arcas del partido del Estado de 25 millones de dólares per cápita como mínimo (75 mil millones de viejos pesos). Y en

este país donde 46.8% de los hogares reciben apenas el equivalente a tres salarios mínimos, la respuesta de los 25 fue positiva. Es más, Emilio Azcárraga (Televisa), declaró haber "ganado tanto" en los tiempos que corren, que ofreció una suma aún mayor (El Economista, 26 de febrero).

Para mejor comprender la noticia anterior, conviene saber algo sobre el CMHN. Se trata de una organización empresarial que surgió durante el sexenio de Adolfo López Mateos (había que meter en cintura al gobierno "de izquierda dentro de la Constitución"), para abordar los grandes problemas del país desde el punto de vista de los grandes empresarios. Se ingresa a ella sólo por invitación. Según Roderic Ai Camp —un académico norteamericano dedicado al estudio de las élites mexicanas—, la influencia política de esa organización, que siempre fue considerable, es hoy mayor que nunca.

Los 36 integrantes del CMHN, forman una especie de hermandad con acceso directo al Presidente y a los secretarios de Estado. Esta capacidad de acceso se usa con discreción, pues hay "una intención deliberada de mantener en secreto sus actividades". El *modus operandi* del CMHN es informal, no se toman notas en sus reuniones ni queda constancia escrita de lo ahí dicho. Quizá el CMHN no corresponde a la naturaleza de las organizaciones empresariales en sistemas modernos. Sin embargo, es evidente que el CMHN es una organización perfectamente adaptada al tipo de política que se hace en México. Así, por ejemplo, mientras los mexicanos comunes aún nos preguntamos cuáles pueden ser los proyectos o "plataformas" de los cuatro "tapados" o aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, los 36 del CMHN ya han tenido la oportunidad de discutirlo directamente con ellos en discretas reuniones (El Financiero, 4 y 19 de enero).

Desde siempre, el poder político y el económico han buscado ir juntos. En los países centrales del siglo XIX, aquellos que el capitalismo salvaje de la época estaba transformando mediante la revolución industrial, dinero e influencia política estuvieron tan unidos, que Carlos Marx consideró como evidente e inevitable que el gobierno no fuera otra cosa que un mero representante de la gran burguesía disfrazado de representante del interés general. Es verdad que la visión marxista simplificó enormemente la naturaleza del gobierno, pero no

resultó enteramente falsa. La democracia moderna —posterior a la segunda Guerra Mundial— es resultado de una larga evolución del mundo occidental. Este proceso, ha permitido la construcción de una compleja red de instituciones políticas basadas en un supuesto que en sí mismo no es evidente: que en cuanto a ciudadanos, todos somos iguales y valemos lo mismo, independientemente de posición económica, raza, sexo, religión, etcétera.

En la práctica, este principio de igualdad política ha sido derrotado muchas veces por la desigualdad social real. El enorme poder del dinero ha hecho que el punto de vista e intereses de unos pocos se sobrepongan a los de los más. Estados Unidos es un ejemplo ideal para ilustrar este problema, pues ahí se han dado choques titánicos entre auténticas instituciones democráticas y grandes intereses capitalistas, justamente como los que Ortiz Mena invitó a su casa la semana pasada.

El siglo XIX norteamericano —el siglo liberal por excelencia— ofrece algunos de los mejores ejemplos de cómo el dinero puede transformarse en influencia política y corruptor de las instituciones políticas democráticas. Tomás Edison, un espíritu selecto, extraordinario hombre de ciencia, en su calidad de industrial no tuvo el menor empacho en hacer contribuciones de mil dólares entre legisladores de Nueva Jersey para lograr que se aprobaran ciertas disposiciones que beneficiaban a sus negocios. En realidad, en materia de usar el dinero para corromper al sistema político, el gran inventor era mero aprendiz. Los dueños del Central Pacific, por ejemplo, fueron más exitosos: donaron a varios políticos de Washington 200 mil dólares y éstos, en agradecimiento, les consiguieron más de cuatro millones de hectáreas de terrenos públicos para su ferrocarril. J. P. Morgan, el famoso banquero neoyorquino, en 1900 decidió agrupar en la U.S. Steel Corporation a varias acerías que había adquirido, las sobrevaluó por 400 millones de dólares y luego vendió las acciones. El negocio le salió redondo tanto a él como a los accionistas, pues varios donativos sustantivos hechos a políticos en Washington, hicieron que el Congreso impusiera un alto impuesto al acero importado y la U.S. Steel pudo vender el suyo con un alto margen de ganancia. Los ejemplos se pueden multiplicar hasta casi el infinito. Ahora bien, si eso ha pasado —y sigue pasando— en sistemas democráticos, qué no pasará en sistemas

democráticos, como el nuestro, donde casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza pero donde, también, 25 personas pueden donar 625 millones de dólares a un partido de Estado.

La enorme capacidad del dinero para transformarse en, y corromper al poder político, ha llevado a que de tarde en tarde, las sociedades democráticas reaccionen en contra. Una primera reacción, fue ampliar el sufragio dentro del universo masculino, echando por tierra el requisito de tener un patrimonio mínimo para poder votar. El siguiente paso fue, justamente, limitar la influencia de las grandes fortunas sobre los partidos y sobre el gobierno. En el segundo decenio de este siglo, —y para seguir con el ejemplo norteamericano— Woodrow Wilson logró llegar a la presidencia de su país, enarbolando un programa —la "Nueva Libertad"— que buscaba desembarazar al gobierno del estrecho y prolongado abrazo que le había dado el gran capital.

Mucho ha avanzado Estados Unidos en el camino que marcó Woodrow Wilson, pero la lucha no ha terminado, y el caso de otro Presidente, Richard Nixon, lo ilustra bien. A raíz del escándalo de Watergate (1972) salieron a la luz contribuciones ilegales por varios millones de dólares hechas por empresas tan "respetables" como la Gulf Oil, ITT o American Airlines, a los encargados de la campaña electoral de Richard Nixon (H. Zinn, A People's History of the U.S., p.531).

Hoy, cuando el siglo está por concluir, en Estados Unidos y en Europa, hay toda un área de legislación que busca poner límites claros a la influencia del gran capital sobre los partidos, congresos y sobre el Poder Ejecutivo y su gran burocracia. En Estados Unidos, por ejemplo, todo donativo a una campaña presidencial que pase de 200 dólares debe ser registrado. Ninguna persona o institución puede dar más de 1,000 dólares a un mismo candidato; el límite del donativo aumenta a 5,000 dólares si se trata de un comité de acción política (PAC) y a 20 mil si se hace a alguno de los comités nacionales de uno de los partidos registrados. El propio candidato presidencial de un partido que recibe subsidio federal (Demócrata y Republicano, no el independiente de Ross Perot) o su familia, no pueden aportar más de 50 mil dólares para gastos de las elecciones primarias y otro tanto para la campaña propiamente dicha. Finalmente, para esos partidos que disfrutan de subsidio federal, hay un límite en sus gastos

con dineros privados: 28.2 millones de dólares en las elecciones primarias y 56.5 millones para la campaña presidencial.

Comparemos las cifras anteriores con las cantidades demandadas por Genaro Borrego a los grandes empresarios simpatizantes del PRI. Desde esta perspectiva, resulta que el líder formal del PRI les ha pedido a la élite económica del país mil veces más que la cifra máxima que cualquier persona o instituciones en Estados Unidos puede donar a un candidato o partido político, y eso que tales partidos operan en una sociedad cuya economía es 20 veces mayor que la mexicana. El gobierno mexicano, tan bueno para controlar los aumentos salariales, no parece dispuesto a hacer lo mismo con las contribuciones privadas a los partidos políticos. A observaciones como las anteriores, Ortiz Mena —el encargado de administrar la inversión privada que llegue al PRI— ha señalado que el dinero que está pidiendo no va a ser empleado en ninguna campaña presidencial, sino para crear un fideicomiso que dé autonomía al partido frente al Estado (EXCELSIOR, 3 de marzo). Esa afirmación tiene varios problemas. Primero, implícitamente se acepta que hasta hoy el PRI ha dependido del gobierno, cosa que no por sabida deja de ser ilegítima e ilegal. Segundo, quizá se corte el cordón umbilical del PRI con el gobierno —lo que está por verse— pero en cambio nace otro que liga al PRI con el gran capital, situación que desde el punto de vista del interés general, no es ganancia. Finalmente, si los 625 millones de dólares no se emplean directamente en la campaña de 1994, no hay duda de que ayudarán a liberar otros recursos que sí se pueden usar para esos propósitos. En cualquier caso, los límites a contribuciones políticas en Estados Unidos, dan una buena idea de la magnitud del compromiso que el PRI va a adquirir con los inversionistas privados.

Es difícil, por no decir imposible, suponer que un empresario done 25 millones de dólares a un partido de Estado sólo por simpatía. Si los poderosos invierten 25 millones de dólares en el mercado político es porque de algún modo piensan recuperar esa inversión y con ganancias. Según Ortiz Mena, los poderosos de México van a dar al PRI cuantiosos recursos sin esperar nada concreto a cambio sino simplemente para "tener la seguridad de sus inversiones" (EXCELSIOR, 3 de marzo). Esta es otra manera de decir que están comprándole protección al

gobierno por medio de su partido. ¿Y el costo de esa protección se le va a añadir al de los bienes y servicios que nos venden al resto de los mexicanos? ¿El señor Aspe se los va a deducir de impuestos? La política ha sido definida como un proceso en virtud del cual las autoridades distribuyen los valores escasos de una sociedad (David Easton). Y en efecto, valores escasos son, además de la seguridad prometida, las concesiones de 62 repetidoras de televisión que busca Televisa (El Financiero, 6 de enero). Valores escasos son, igualmente, los aumentos autorizados a Telmex —naturalmente Carlos Slim se encontraba entre los 25 de a 25— pese a sus deficientes servicios. Desde luego que algo escaso y valioso es, si duda, el mantenimiento del monopolio que en sus respectivas áreas tiene Telmex y Televisa.

C. Wright Mills, un sociólogo norteamericano radical, publicó en 1956 La élite del poder (la edición del Fondo de Cultura de 1957). Se trata de un estudio de la estructura del poder en la sociedad norteamericana, pero cuyas conclusiones se pueden utilizar para muchas otras. Según Mills, en ciertas sociedades, hay una minoría poderosa "compuesta de hombres cuyas posiciones les permiten trascender los ambientes habituales de los hombres y mujeres corrientes". En Estados Unidos, el poder real reside en los pináculos o élites de los dominios económico, político y militar; todas las demás instituciones están subordinadas a esos tres dominios. "El concepto de la élite del poder y su unidad —nos dice—, se apoya en el desarrollo paralelo y la coincidencia de intereses entre las organizaciones económicas, políticas y militares. Se funda también en la similitud de origen y de visión, de contacto social y personal, entre los altos círculos de cada una de dichas jerarquías dominantes". Los miembros de la élite del poder, afirma el sociólogo, se conocen entre sí, y a tomar decisiones "se tienen en cuenta unos a otros".

Quitemos de la definición anterior a los militares y quedémonos únicamente con las élites que se reunieron en casa de Ortiz Mena —la política y la económica—, y añádanse a ellos representantes del gran capital extranjero y al alto clero, y ya se tiene ya a la élite del poder mexicana, a los pocos que buscan determinar las condiciones en que habrán de vivir y morir los mexicanos comunes del siglo XXI. Frente a ellos, la democracia verdadera tiene pocas o ninguna posibilidad.